

RFEMITE A ORIGEN RESUELVE AP. AUTO 2019.00217.01 CARLOS GAMEZ VS ALLIANZ SEGUROS S.A.
Maria Fernanda Castro Valencia <mcastrova@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 1/07/2022 8:00 AM

Para:

- Juzgado 03 Civil Circuito - Magdalena - Santa Marta <j03ccsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC:

- Secretaria Sala Civil Familia - Seccional Santa Marta <secscfsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
- Luis Gabriel Lopez Daza <llopezd@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
- Maria Juliana Perez Hernandez <mperezhe@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 5 archivos adjuntos (44 MB)

RESUELVE RECURSO 2019.00217.01.pdf; 1.6 ActaReparto superior.pdf; PASE AL DESPACHO APELACION DE AUTO SOCIEDAD CSP INGENIERIA SAS CONTRA PROACTIVA SANTA MARTA.pdf; 2019-00217-01 EJECUTIVO.rar; OF 287 REMITE A JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA.pdf;

De: Secretaria Sala Civil Familia - Seccional Santa Marta <secscfsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 30 de junio de 2022 10:02 a. m.

Para: Maria Fernanda Castro Valencia <mcastrova@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Luis Gabriel Lopez Daza <llopezd@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Maria Juliana Perez Hernandez <mperezhe@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RFEMITIR A ORIGEN RESUELVE AP. AUTO 2019.00217.01 CARLOS GAMEZ VS ALLIANZ SEGUROS S.A.

De: Alberto Rodriguez Akle <arodrigueza@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 2:54 p. m.

Para: Luis Gabriel Lopez Daza <llopezd@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Sala Civil Familia - Seccional Santa Marta <secscfsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Rafael Carpio Cantillo <rcarpio@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Maria Juliana Perez Hernandez <mperezhe@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Adriana Castro <caadriana1997@gmail.com>

Asunto: RESUELVE AP. AUTO 2019.00217.01 CARLOS GAMEZ VS ALLIANZ SEGUROS S.A.

Buenas tardes,

Se remite para su notificación por estado.

A su servicio,

Yesenia Musso Rocha

Auxiliar Judicial I

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y

eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL
DE SANTA MARTA**

**SALA CIVIL FAMILIA
APELACION DE AUTO**

MAG PONENTE .ALBERTO RODRIGUEZ AKLE.

PROCESO EJECUTIVO DEMANDANTE: SOCIEDAD C.S.P.
INGENIERIA S.A.S. DEMANDADO: PROACTIVA SANTA MARTA
S.A. E.S.P..APELACION DE AUTO DE 20 DE MAYO DE 2021
DICTADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE
SANT MARTA

RECIBIDO: ENERO 24 DE 2022 HORA 1.59 P.M .
FOLIO 375 LIBRO 52

RADICACIÓN
47001315300320190021701



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Página 1

Fecha: 24/01/2022 1:52:19 p. m.

NÚMERO RADICACIÓN: **47001315300320190021701**

CLASE PROCESO: APELACIÓN AUTO

NÚMERO DESPACHO: 000 **SECUENCIA:** 3502740 **FECHA REPARTO:** 24/01/2022 1:52:19 p. m.

TIPO REPARTO: EN LÍNEA **FECHA PRESENTACIÓN:**

REPARTIDO AL DESPACHO: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA

JUEZ / MAGISTRADO: ALBERTO RODRIGUEZ AKLE

TIPO ID	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	APELLIDO	PARTE
NIT	8600261825	ALLIANZ DE SEGUROS S.A.		DEMANDADO/INDICIADO/CAUS ANTE
CÉDULA DE CIUDADANIA	1082882384	YUSELFX HAYDEE	CRUZ TELLER	DEFENSOR PRIVADO
CÉDULA DE CIUDADANIA	7602471	CARLOS IVAN	GAMEZ NOGUERA	DEMANDANTE/ACCIONANTE

14975dcf-2d4b-4d85-85e7-9fc7981ca7bb

GENERADO AUTOMÁTICAMENTE

SERVIDOR JUDICIAL

Rad. 2019-00217 remisión apelación de auto

Juzgado 03 Civil Circuito - Magdalena - Santa Marta <j03ccsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 24/01/2022 1:59 PM

Para: Secretaria Sala Civil Familia - Seccional Santa Marta <seccsfsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señores

Tribunal Superior de Distrito Judicial

Secretaría Sala Civil - Familia

Cordial Saludo

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO

DEMANDANTE: SOCIEDAD C.S.P. INGENIERIA S.A.S.

DEMANDADO: PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P.

RADICACION: 2019-00217-00

Acorde a lo dispuesto en providencia de fecha 14 de enero del año en curso, remito el expediente de la referencia para los fines pertinentes.

Consta de un archivo en formato RAR, compuesto internamente por 5 carpetas, se adjunta acta de reparto.

Erwing Dalí Jiménez Domínguez

Secretario.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA
SALA CIVIL FAMILIA

APELACION DE AUTO

RADICADO: 47001315300320190021701

SANTA MARTA, 25 DE ENERO DE 2022.

EN LA FECHA PASO AL DESPACHO DEL MAGISTRADO ALBERTO RODRIGUEZ PROCESO EJECUTIVO DEMANDANTE: SOCIEDAD C.S.P. INGENIERIA S.A.S. DEMANDADO: PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P..APELACION DE AUTO DE 20 DE MAYO DE 2021 DICTADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANT MARTA

LA PRESENTE SOLICITUD FUE RECIBIDA EL 24 DE ENERO DE 2022 A LAS 1.59 P.M , ESTÁ COMPUESTA POR 2 CARPÉTA Y CONSTANCIA DE HORA DE RECIBIDO PARA TRAZABILIDAD, PROVEA.

ENRIQUE VANEGAS BORNACHERA
Secretario.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Página 1

Fecha: 24/01/2022 1:52:19 p. m.

NÚMERO RADICACIÓN: **47001315300320190021701**

CLASE PROCESO: APELACIÓN AUTO

NÚMERO DESPACHO: 000 **SECUENCIA:** 3502740 **FECHA REPARTO:** 24/01/2022 1:52:19 p. m.

TIPO REPARTO: EN LÍNEA **FECHA PRESENTACIÓN:**

REPARTIDO AL DESPACHO: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA

JUEZ / MAGISTRADO: ALBERTO RODRIGUEZ AKLE

TIPO ID	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	APELLIDO	PARTE
NIT	8600261825	ALLIANZ DE SEGUROS S.A.		DEMANDADO/INDICIADO/CAUS ANTE
CÉDULA DE CIUDADANIA	1082882384	YUSELFX HAYDEE	CRUZ TELLER	DEFENSOR PRIVADO
CÉDULA DE CIUDADANIA	7602471	CARLOS IVAN	GAMEZ NOGUERA	DEMANDANTE/ACCIONANTE

14975dcf-2d4b-4d85-85e7-9fc7981ca7bb

GENERADO AUTOMÁTICAMENTE

SERVIDOR JUDICIAL

República de Colombia



Rama Judicial del Poder Público
Tribunal Superior del Distrito Judicial Santa Marta
Sala Civil -Familia

Magistrado Ponente:
Alberto Rodríguez Akle

Santa Marta, veintidós (22) de junio de dos mil veintidós (2022)

RADICADO: 47.001.31.53.003.2019.00217.01 (Fl. 202 Tomo V)

ASUNTO

Procede esta Sala de Decisión a resolver la apelación interpuesta por la parte ejecutante, contra el auto adiado veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021) proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, dentro del proceso ejecutivo promovido por CARLOS IVÁN GAMEZ NOGUERA contra ALLIANZ SEGUROS S.A.

ANTECEDENTES

Se interpuso proceso ejecutivo en contra de ALLIANZ SEGUROS S.A., para el cobro de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 022280019/0, y que se librara mandamiento de pago por valor de \$320.842.358 por capital, y \$87.937.348 por intereses moratorios, más los que en lo sucesivo se causen.

En breve síntesis, el togado del ejecutante adujo que con ocasión a un accidente acontecido el 15 de julio de 2018, resultó herido su representado a causa del vehículo de placas ZXX-762. Se manifestó que el vehículo era manejado por el señor JUAN CARLOS BAYONA VILLEGAS, e impactó en la motocicleta de placas HUN-76C, que era conducida por el demandante CARLOS IVÁN GÁMEZ NOGUERA. Este último, figura como tomador y asegurado ante la empresa ALLIANZ SEGUROS S.A. de un contrato de seguro que recae sobre el carro. Alega que se presentó una reclamación para el reconocimiento y pago de los riesgos en la póliza, con miras a resarcir los perjuicios causados al demandante debido al siniestro.

Explica que dicha petición fue presentada el 3 de octubre de 2018 en conjunto con los documentos necesarios que acreditan la ocurrencia del hecho y la cuantía de la pérdida, y que la aseguradora no objetó la solicitud dentro del mes de que trata el numeral 3 del artículo 1053 del C. de Co., sino que lo hizo pasados los 35 días, esto es, el 7 de noviembre de 2018, aunado a estar

demostrados los demás requisitos para procurar el cobro de la obligación.

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta libró mandamiento de pago con auto del dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), y decretó medidas cautelares. Consideró que la póliza de seguro prestaba mérito ejecutivo al reunir los requisitos de los artículos 244 y 422 del C.G.P; y 1053 y 1080 del Código de Comercio, en la medida que no fue objetada en el término legal por la demandada dando lugar a que se convirtiera en un título que podía ser cobrado por la vía judicial. (Exp. Ppal. Fls 323 al 324).

Inconforme con lo proveído, el apoderado de la parte ejecutada interpuso recurso de reposición. Argumentó que no se demostró la responsabilidad del asegurado, siendo ello necesario para estructurar el título ejecutivo; que el accionante no probó el dominio sobre el automotor por lo que no tiene interés asegurable; que no existe responsabilidad extracontractual porque fue el mismo asegurado quien se lesionó, y que tal aspecto está dentro de las exclusiones de la póliza, al no cubrir las lesiones ni muerte causadas al asegurado, e igualmente se excluyó el pago cuando el asegurado o el conductor autorizado por éste acepte la responsabilidad sin autorización expresa por parte de ALLIANZ SEGUROS S.A, circunstancia que alega se dio en el presente debido a que el señor JUAN CARLOS BAYONA VILLEGAS -quien controlaba el vehículo autorizado por el asegurado- asume por medio de escrito presentado a la Fiscalía ser el responsable de las lesiones ocasionadas al señor GAMEZ NOGUERA. Así mismo, que no demostró la cuantía de los perjuicios morales, ni intereses, ni los daños físicos y salud, del hurto del celular, y los causados a la moto. (C. Ppal. Fls. 334 al 341).

Además, se contestó la demanda, proponiendo como excepciones de mérito las denominadas “inexistencia de título ejecutivo”, “falta de legitimación en la causa activa por estar el riesgo excluido en la póliza”, “falta de interés asegurable”, “carga de la prueba de los perjuicios reclamados a cargo del demandante”.

AUTO APELADO

Mediante auto del veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021) el *a quo* decidió reponer su decisión, negó el mandamiento de pago, y levantó las medidas cautelares. Para arribar a tal determinación, razonó que en el contrato de seguro se excluyó el daño causado al mismo asegurado conforme la cláusula 1.1.2., y que se demandaba precisamente los daños irrogados al demandante Carlos Iván Gámez Noguera, tomador, asegurado, y víctima del accidente, no siendo posible ser responsable por sí y ante sí.

Remató afirmando que *“Si el Juzgado en su momento no se percató de tal circunstancia y libró la orden de pago, nada obsta para que, en virtud de la reposición, enmiende para negarlo y disponga el levantamiento de las cautelas, decisión perfectamente plausible si se recuerda que, como lo señaló la Corte en la providencia antes citada, “... el silencio del asegurador no modifica los términos del contrato, por lo cual si un riesgo en general o una especie dentro del riesgo general, no fue amparado por la póliza, mal puede prosperar la demanda del presunto beneficiario y así puede y debe declararlo el Juez por vía exceptiva.”, o bien, del recurso horizontal, porque, en últimas, si se prueba el límite negativo de la póliza en el umbral de la ejecución, lo que se afecta es justamente su ejecutabilidad ante la falta de cobertura de la prestación cobrada con la demanda.”* (Fls. 539-541 C. Ppal.)

EL RECURSO

Inconforme con lo resuelto, a través de su apoderado judicial, el demandante apeló oportunamente y solicitó la revocatoria del proveído. Como primer argumento, adujo que el juzgado había extendido el plazo de 30 días del artículo 1053 del C. de Co. para contestar la reclamación.

Luego de hacer un recuento del contrato de seguro, puso de presente que reclamó la prestación junto a las pruebas a las que obliga el artículo 1077, y que fue objetada extemporáneamente al día 35. Conforme a lo anterior, alega que se estructuró un título ejecutivo, y que no podían considerarse los argumentos dados por la aseguradora en el recurso de reposición, porque a su juicio eso se convierte en una *indebida extensión del plazo que confiere el artículo 1053*. Coherente a lo expuesto, afirmó que solo podrán aceptarse dentro de este proceso las explicaciones propuestas como excepciones de fondo, y no en esta etapa inicial, y que es en la sentencia que ponga fin a la instancia, previo la práctica de pruebas, que podrán apreciarse las alegaciones hechas, y resolver lo que en derecho corresponda.

Así mismo, pregonó que la póliza presentada sí ampara evidentemente los daños causados al propietario del vehículo automotor de la tomadora. Indicó que en el capítulo 2, “coberturas al vehículo y su propietario”, “2.6 accidentes personales y 2.6.1” se cubren los riesgos a favor del demandante, siendo que de todas formas tales inquietudes existieran, deberían postularse a través de excepciones perentorias, como en efecto hizo por la parte demandada. (Exp. Ppal Fls. 543 al 554)

CONSIDERACIONES

El recurso de apelación o alzada se instituyó como el garante del principio de doble instancia en las actuaciones judiciales, presente en el artículo 31 de la Constitución Política de Colombia¹.

En efecto, dicho instrumento tiene como función principal la corrección de los pronunciamientos judiciales, que, como toda obra humana, no están exentos de yerros. Así pues, dicho medio de contradicción brinda la oportunidad para que las decisiones elaboradas por los Funcionarios Judiciales del Estado sean revisadas por organismos de superior jerarquía, que verifiquen si en efecto ha existido o no la falencia endilgada.

El Código General del Proceso -C.G.P.- dispuso que el recurso de apelación es taxativo, y solamente en aquellos casos que el legislador lo permita, será procedente. En el asunto *sub examine* el recurso es admisible toda vez que se trata de un proceso de mayor cuantía, y conforme al artículo 438 del C.G.P. el auto que por vía de reposición revoque el mandamiento de pago es apelable en el efecto suspensivo.

Con la finalidad de desatar el recurso, la Sala se referirá al mandamiento de pago tratándose de procesos donde se persigue el cumplimiento de un contrato de seguros. Sobre tal aspecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en la STC7190 de 2017, y en la STC928 de 2020. En la primera de ellas, la Corte analizó el caso de un proceso ejecutivo, donde las entidades judiciales habían negado el auto de mandamiento de pago en virtud de una reclamación hecha para obtener la indemnización proveniente de un contrato de seguros de responsabilidad, luego del acaecimiento de un accidente de tránsito.

En aquel caso, los demandantes alegaron que existía un título ejecutivo porque tras hacer la reclamación la aseguradora no la objetó dentro del plazo del numeral 3 del artículo 1053. El Juzgado de Circuito libró mandamiento de pago, y luego que la ejecutada presentara reposición, se revocó, para negar la orden de apremio. Tal determinación fue confirmada por el Tribunal. La Corte, para desatar la tutela, expuso que

Ahora, en lo que no erró el Tribunal fue en advertir que en los casos en que la víctima pretenda hacer uso de la prerrogativa que consagra el ya mencionado artículo 1053 (numeral 3º) del Código de Comercio, «le correspondería probar otros supuestos antes de pretender ejecutar una obligación» y que «el seguro de responsabilidad impone unas cargas probatorias que no permiten que la póliza per se preste mérito ejecutivo, más aun cuando quien pretende ejecutar la obligación son las víctimas de un accidente, sin antes haber demostrado la

¹ Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

responsabilidad», eso sí, sin que se pueda exigir, como lo señaló el juzgador accionado, que dicho aspecto deba ser acreditado «a través de (...) un proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual», pues ello equivale a establecer una tarifa legal que tampoco contempla el ordenamiento jurídico vigente.

Así pues, para que la reclamación de la víctima pueda cumplir con los presupuestos exigidos por el tantas veces citado artículo 1053 (numeral 3º) del Estatuto Mercantil, **debe acreditarse «la responsabilidad del asegurado» como aspecto necesario para la configuración del siniestro, elemento que debe probar la víctima a voces de lo que establece el artículo 1077² de esa misma codificación, según remisión consagrada en el prenotado numeral tercero.**

En este orden de ideas, era carga de los demandantes demostrar el referido presupuesto (responsabilidad del asegurado), con miras a dotar de mérito ejecutivo la póliza sustento de su demanda ejecutiva, lo que no hizo, según se constató en las copias aportadas con el libelo de tutela, pues lo único que se probó fue la ocurrencia del accidente de tránsito en el que resultó lesionado Roberto Carlos Sáenz Madrid y en el que intervino el vehículo de placas DGZ-768, asegurado por Allianz Seguros S. A., más no aparece acreditado que la ocurrencia de tal suceso fuera atribuible a quien funge como asegurado. (Se resalta) (Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. STC7190-2017. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo)

Bajo los anteriores razonamientos, la Corte denegó la tutela presentada, esto es, avaló el negar el mandamiento de pago vía reposición, por las razones esgrimidas. De ellas, se observa que no basta con que la objeción haya sido extemporánea, sino que se deben cumplir otros requisitos para librar el mandamiento de pago tratándose de un seguro de responsabilidad; en especial, que ésta se encuentre plenamente demostrada, lo que generaría la expresividad, claridad y exigibilidad requerida por el artículo 422 del C.G.P.

Por otra parte, en la STC928 de 2020, con ponencia del Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque, al igual que en la anterior, la Corte analizó el caso de un proceso ejecutivo, donde las entidades judiciales habían negado el mandamiento de pago en virtud de una reclamación hecha para obtener la indemnización proveniente de un contrato de seguros de responsabilidad, luego del acaecimiento de un accidente de tránsito. Ello, luego de que alegaran que no se había acreditado con la reclamación la responsabilidad en la causación del accidente en cabeza del conductor del vehículo asegurado por la ejecutada.

La Corte negó la tutela, tras percatarse que los estrados judiciales demandados tomaron su determinación “al no acreditarse la responsabilidad directa del «vehículo asegurado» en los «perjuicios»

² Establece dicho artículo que «corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso».

suplicados y, por ende, el « *siniestro* », [lo que implica que] la « *ejecución contra la Aseguradora* » deviene infértil.".

La Corte expuso:

De este modo, si el sentenciador atacado no encontró estructurada la « *responsabilidad* » con fundamento en la cual la peticionaria exige « *ejecutar* » a la « *Aseguradora* », mal puede censurarse la « *negativa a librar mandamiento de pago* » por los « *perjuicios* » que afirma haber sufrido en el « *accidente de tránsito* » de 6 de mayo de 2016. (...) De ahí, que como lo esbozó la Sala enjuiciada, ante la incertidumbre en relación con el origen de los daños cuya « *indemnización* » se anhela, no es posible aseverar que a cargo de la « *Aseguradora* » y a favor de Montilla Echavarría exista una « *obligación clara, expresa y exigible* », lo que a la luz del numeral 3 del artículo 1053 del Código de Comercio, en armonía con el 422 del Código General del Proceso, impiden exigir por el camino del ejecutivo su solución. (Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. STC928 de 2020. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque)

En idéntico sentido a la anterior providencia, se puede concluir que no basta con que la objeción haya sido extemporánea para dotar de mérito ejecutivo el contrato de seguro. Se requiere además que se prueben los elementos del artículo 1077, estos son, la ocurrencia del siniestro y la cuantía.

Además, ambas providencias dan cuenta de algo relevante para la resolución de este recurso: sí es posible negar el mandamiento de pago a través del recurso de reposición, muy a pesar de que la objeción haya sido extemporánea.

Los anteriores raciocinios –a juicio de la Sala– son coherentes con el artículo 422 del C.G.P. El proceso ejecutivo tiene la potestad de aplicar la fuerza coercitiva del Estado para la satisfacción de las obligaciones. El requisito que impuso la ley es que no exista la más mínima duda sobre la existencia, claridad, expresividad y exigibilidad del derecho personal; por lo que siempre deben tenerse por demostrados para que el juez libre la orden de apremio. Entonces, no se podría disponer si el convenio pretendido no goza de tales características.

Ahora, indiscutiblemente que el artículo 1053 del código de comercio en su numeral 3 indica que "La póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, **por sí sola**, en los siguientes casos: (...) 3) Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que, sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo [1077](#), **sin que dicha reclamación sea objetada**. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante deberá manifestar tal circunstancia en la demanda." (Se resalta)

Pero esa norma debe ser interpretada sistemáticamente con el artículo 1045 del C. de CO, y 427 del C.G.P. En efecto, el primero enseña que el cuarto elemento esencial del contrato de seguro es la obligación condicional del asegurador. Si está sometida a condición, en este caso suspensiva, no podría dictarse orden de pago si no se prueba el acaecimiento de ésta, por carecer de exigibilidad. En ese sentido, el canon 427 de la norma procesal enseña que “cuando se pida ejecución por perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación de no hacer, o la destrucción de lo hecho, a la demanda **deberá** acompañarse el documento privado que provenga del deudor, el documento público, la inspección o la confesión judicial extraprocesal, o la sentencia que pruebe la contravención. **De la misma manera deberá acreditarse el cumplimiento de la condición suspensiva cuando la obligación estuviere sometida a ella.** Así, por el solo hecho de que se haya objetado tardíamente la reclamación y se hayan aportado unas pruebas, no se podría pensar automáticamente que los documentos están dotados de mérito ejecutivo. Debe estar cumplida la condición.

Bajo ese parangón, y en unión a los raciocinios de la Corte, sí es viable negar el mandamiento de pago, sin esperar a dictar sentencia, cuando a juicio del juzgador no se encuentren reunidos los requisitos formales del título, entre ellos la exigibilidad. Unido a lo anterior, el artículo 430 enseña que “(...) **Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo.** No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.” Y lo claro, expreso y exigible de la obligación son los requisitos del título. Ello sin perjuicio de que puedan conocerse con posterioridad, según se ha decantado en otros proveídos. Sobre esto último, en la TC8929-2019 la Corte adujo que

“En conclusión, la hermenéutica que ha de dársele al canon 430 del Código General del Proceso **no excluye la «potestad-deber» que tienen los operadores judiciales de revisar «de oficio» el «título ejecutivo» a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de única, primera o segunda instancia (...)**, dado que, como se precisó en CSJ STC 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, «en los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los términos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el título ejecutivo (...) Sobre esta temática, la Sala ha indicado que **“la orden de impulsar la ejecución, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario análisis de las condiciones que le dan eficacia al título ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuación procesal (...)**”. **“De modo que la revisión del título ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del Código General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y también en la sentencia**

que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (...)". Radicación N° 25000-22-13-000-2019-00018-01 MP. Luis Armando Tolosa Villabona.

*De ese recuento emerge, sin duda, que cuando **el iudex va a «definir el mérito» de toda contienda coercitiva debe indefectiblemente ocuparse de verificar lo relativo a los presupuestos del «título base de recaudo», no sólo cuando haya «excepciones» enderezada a rebatir tales elementos, sino «aun de oficio» en los casos en que no las haya, dada la «potestad-deber» que le ha sido conferida, consistente en determinar, aun por su propia cuenta, la acreditación de tales exigencias.** (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. STC8929-2019. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque)*

Luego entonces, aunque existe la oportunidad de hacerlo inclusive al dictar sentencia, la ley también permite valorar el mérito ejecutivo del documento a través del recurso de reposición contra el mandamiento de pago. No tendría objeto extender hasta la sentencia un proceso, si el juzgador de antemano estima que no existen los elementos para librar el mandamiento de pago, y fue previsto en las vías, derroteros y oportunidades sentadas por la ley, en aplicación de los principios de eventualidad y preclusión.

Corolario, no se comparte la posición de la censura, porque el juzgado no extendió el plazo para objetar la reclamación. La aplicación de la ley procesal –misma que es de orden público, y, por ende, de obligatorio cumplimiento– en ningún momento implica la variación de otra legislación, aunque sea de carácter sustancial. Lo realizado se limitó a verificar si estaban dados los requisitos para dotar de título ejecutivo el contrato, e, interponer un recurso de reposición contra el mandamiento de pago en lo más mínimo equivale a objetar la reclamación hecha en su momento. Son actos jurídicos disímiles. Ahora, que tengan similares efectos, como lo hace ver el recurrente, no le resta su diferenciación al interior del marco jurídico.

Nótese que es precisamente el recurso de reposición la oportunidad que el ejecutado tiene para discutir –entre otras– la exigibilidad de la obligación, circunstancia que fue la realizada por Allianz Seguros S.A.; y si so pretexto de que se tenían 30 días para objetar la reclamación, se niega la posibilidad de reponer el mandamiento de pago por falta de aquel requisito, se desatendería la previsión normativa en comento.

Bajo ese hilo, no se desconoce que la aseguradora objetó tardíamente. Pero según los precedentes citados, y los artículos 422 y 430 del C.G.P., el recurso de reposición es un derrotero válido para analizar el mérito ejecutivo de los documentos adosados, por lo que no se considera que se haya extendido el plazo para rebatir. No sale avante el reparo.

Ahora bien, discusión distinta es si a pesar de hacerse en la oportunidad prevista en la ley, el juzgador de instancia haya acertado en sus elucubraciones; tema también reprochado por el apelante, y del que se centrará la Sala a continuación.

Según se decantó, la obligación de la aseguradora está sometida a la condición de la causación del siniestro y prueba del monto del daño. Recuérdese que la expresión *siniestro* hace referencia a la materialización del riesgo amparado por la póliza. Por eso la ley sustancial le pide anexar tales aspectos a la reclamación, así como la ley procesal pide la documental que pruebe el cumplimiento de la condición.

Pues bien, lo primero a mencionar es que no está demostrada la cuantía de la pérdida en su integridad, porque en la reclamación hecha el accionante adujo que los daños físicos que padeció ascienden al monto de \$100.000.000, según tablas que invoca son del Consejo de Estado y la Corte Suprema, sin indicar cuáles. Además, tampoco está demostrado el valor del daño moral aducido, porque solicitó se aplique un test de proporcionalidad, donde se tuviera por principal afectado, por un valor de \$150.000.000, conforme sus ingresos.

Entonces, a juicio de la Sala tales montos no tienen una prueba en este instante que permita afirmar con tranquilidad que se cumplieron a cabalidad las pautas del artículo 1077, y con ellas la del numeral 3 del 1053. Si bien el juzgado de instancia no tuvo eso en consideración, por aplicación del precedente de la Corte sobre análisis del mérito ejecutivo del documento, no podría la Sala ignorar lo mencionado, por estar obligados en virtud del artículo 430 de la ley 1564. Bajo ese derrotero, existe una incertidumbre que resta mérito ejecutivo a la póliza mencionada, y que es insubsanable por este derrotero. Ahora, ello no quiere decir que el derecho se haya perdido, aspecto desconocido por la Sala al llevar envueltos otras elucubraciones jurídicas y fácticas que no son de esta instancia, solamente se afirma que no están reunidos los requisitos para tomar la póliza como título ejecutivo por falta de demostración del monto del perjuicio, conforme a los artículos 1077 y 1053.

Si no está demostrada la cuantía del daño a la salud y el moral, y el siniestro, faltaría la prueba del cumplimiento de la condición que obliga al asegurador, lo que negaría la exigibilidad del título, eje fundamental para ordenarle al deudor pagar.

Por otra parte, de las documentales aportadas se da cuenta de la existencia del accidente, que dicho sea de paso en el croquis aportado no se observa la presencia del vehículo asegurado según explicó el ejecutante, y que subsana tal aspecto con declaraciones extraprocesales. Sin embargo, de manera similar a como aconteció

en el caso analizado por la Corte, no se logra extraer que exista una clara responsabilidad del asegurado, o bien de la persona autorizada por él para conducir el vehículo. Nótese que la Fiscalía cuando hace el certificado del estado del proceso, alega que “de acuerdo al documento allegado por el Señor Bayona Villegas, que **al parecer** fue el que ocasionó el accionante de tránsito, en la vía Santa Marta-Palomino Km 62+550.” (Se resalta).

También se tiene la declaración hecha por el señor Bayona Villegas, pero de ella, más que extraerse su propia responsabilidad, se observa su participación en los hechos que interesan al caso, sin que haya confesado la atribución de ellos.

De manera tal que no existe una clara determinación de la responsabilidad, que es lo que activa la póliza, porque la aseguradora se obligó a cubrir “los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales **causados a terceras personas** cuando (Usted o alguien autorizado por Usted) conduzca el vehículo asegurado (...)”, y “los daños sufridos por el vehículo asegurado y los perjuicios causados por **Responsabilidad Civil Extracontractual y cubiertos por esta póliza**, hasta los límites previstos en la carátula, provenientes de un accidente de tránsito ocasionado por el vehículo asegurado en esta póliza, cuando usted o el conductor autorizado desatienda las señales de tránsito o cuando el conductor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, drogas tóxicas, heroínas o alucinógenos”

Como se observa, se requiere para activar la póliza la prueba de la responsabilidad civil extracontractual, pero lo cierto es que no se tiene la certeza tal en esta instancia que permita hacerlo a través de un proceso ejecutivo. No se afirma que el accionante carezca de las prerrogativas que invoca, pero es otro el sendero el que debe ser invocado para acceder a tal. Nótese la oportunidad señalada en el artículo 430 del código general del proceso.

En ese sentido, será necesario confirmar la decisión venida en alzada, no por las razones allá expuestas únicamente, sino también por las aquí citadas en virtud de la ley. En consecuencia, se condenará en costas al recurrente, al resolversele negativamente la apelación. Se fija como agencias en derecho la suma de quinientos mil pesos (\$500.000), en acatamiento de lo dispuesto por los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, y teniendo en cuenta las tarifas establecidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10554 del cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis (2016), así como la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada en esta instancia.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto adiado veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021) proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, dentro del proceso ejecutivo promovido por CARLOS IVÁN GAMEZ NOGUERA contra ALLIANZ SEGUROS S.A., por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Condénese en costas a la parte ejecutante. Fíjense las agencias en derecho en la suma de quinientos mil pesos (\$500.000), correspondientes a medio salario mínimo.

TERCERO: Ejecutoriado este proveído, remítase la actuación al despacho de origen, para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase

ALBERTO RODRÍGUEZ AKLE
Magistrado

Firmado Por:

Alberto Rodriguez Akle
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Civil Familia
Tribunal Superior De Santa Marta - Magdalena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a27c19c2aaeb20f170787a6cc7a86b6f0d010f10434f30e8761583bb479d2b07**

Documento generado en 22/06/2022 09:27:17 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



**REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA
SECRETARIA SALA CIVIL FAMILIA**

Santa Marta, treinta (30) de junio del dos mil veintidós (2022).

OFICIO No. 287-OF

Señores:

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA.

*REF: PROCESO: EJECUTIVO PROMOVIDO POR CARLOS GAMEZ contra ALLIANZ
SEGUROS S.A.- RAD: 47001315300320190021701 M.G. ALBERTO RODRIGUEZ
AKLE.*

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo dispuesto en la providencia de fecha 22 de junio del dos mil veintidós (2022) proferida por esta Corporación, me permito remitirle el proceso de la referencia para lo de su cargo.

Adjunto a la presente, se remiten 4 archivos adjuntos, más el oficio remitatorio 287OF que se anexa.

Cordialmente,

LUIS GABRIEL LÓPEZ DAZA
Secretario Adjunto

Elaboró: María Fernanda Castro
Valencia -Oficial Mayor.

Palacio de Justicia
Calle 20 N° 2ª- 20
Tels: 4212219 – 4210701 - 4232986(fax)
Correo electrónico: secscfsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co